poco sustento, salvo el ser un complemento al nuevo trato que definitivamente sepulte la competencia en la educación universitaria. En otras palabras: los aportes basales solicitados para las universidades públicas son niños de pecho ante esta petición de estatización completa de la educación superior.

En un contexto de ganadores y perdedores, y considerando además a los que hablan poco y que son los miles de usuarios del sistema, parece correcto aventurar que la única medida de las mencionadas que tiene sustento y coherencia es la que plantean con más fuerza los estudiantes más radicales: gratuidad de la enseñanza junto con una reforma tributaria que le dé sustento de largo aliento a esta medida. Sin embargo, y tal como el gobierno y muchos actores han sostenido, esa medida debe ser contrastada con la opción de una educación no discriminatoria, que no distinga entre quién la imparte, pero que asegure la calidad y controle que las instituciones de educación superior no tengan fines de lucro. Suponiendo que es posible evitar el *lobby* de las universidades estatales y privadas tradicionales, una medida que es también coherente y que apunta al corazón del problema es otorgar gratuidad hasta los deciles 4 o 5, financiamiento asegurado y subsidiado a una tasa de 2% sea cual sea la institución de estudio para la población de ingresos medios (deciles 5 a 7), y controlar que no haya lucro con la creación de una superintendencia que haga cumplir la ley.

Sin duda esta medida también requiere de una reforma tributaria, pues detrás de todo lo propuesto no solo está el gasto de las familias, sino la calidad de la educación superior, y por eso es necesario asegurar que la reforma será permanente y no, como lo hace el gobierno, patear para adelante, y con tibieza, la pelota... total ya una próxima revolución pingüina le tocará a otro gobierno. Esta medida, siempre que las instituciones hagan su pega, tiene como ganadores a todos los chilenos, quienes recibirán una educación de calidad, financiada adecuadamente y con un gasto público focalizado en aquellos que realmente la requieren.

La alternativa que plantean los estudiantes apunta a una educación de calidad, pero como el gasto público sería mucho mayor, necesariamente se requiere una reforma tributaria más profunda que empeoraría la eficiencia económica, más allá de lo que lo hace la opción de gasto focalizado. Las otras opciones complementarias a las de gratuidad son solo pan para unos pocos privilegiados y hambre para todos los demás.

Cualquiera sea la opción tomada, el nuevo mapa de la educación superior será definitivamente distinto. Quienes deberían perder son las instituciones que han abusado de la fachada de sociedades inmobiliarias y otras martingalas financieras para licuar sus recursos ante una anodina vigilancia del Ministerio de Educación. Por ello, debería esperarse que sean ellas las que más se opongan a cualquier medida de cambio profundo al sistema. Visto de otro modo, controlado el fin del lucro, solo las instituciones públicas y privadas que reinvierten sus excedentes en mejorar la calidad de su educación deberían ser las grandes beneficiadas.

La opción que proponen de los estudiantes apunta a que el estándar sea igual, como en los alumnos del video clip *The Wall* de Pink Floyd, mientras que una medida de gasto focalizado y control del lucro apunta a fortalecer instituciones con diferentes estándares de enseñanza, y que sean los propios estudiantes quienes opten a cuál de ellas asistir.

El FMI y el gasto social

Por Juan Foxley Rioseco*
**Profesor Facultad de Economía y Negocios UAH*

El siguiente párrafo del reciente Informe de perspectivas económicas para América Latina y el Caribe difundido por el Fondo Monetario Internacional ha parecido sorprender a algunos:

"En los países con una presión tributaria relativamente baja (Chile, México, Perú), es necesario llevar a cabo esfuerzos orientados a movilizar ingresos fiscales para atender las necesidades sociales y de infraestructura de la región, tales como los niveles aún elevados de desigualdad y las necesidades insatisfechas de una clase media en rápida expansión".

La parte más anecdótica de la sorpresa estaría en que el resumen del informe fue leído por un exministro de Hacienda de Chile, país donde cobra vigor la presión por aumentar impuestos. Pero más importante: por lo que revela respecto de los prejuicios de los sorprendidos, está el decir tácito que etiqueta al FMI como un organismo que preferiría impuestos bajos, gasto público bajísimo y Estados pequeños. Aunque no se sostenga explícitamente, se critica que alentar ahora una subida de impuestos sería una suerte de guiño tardío a la justicia distributiva, la misma justicia que el FMI habría menoscabado en su historia de recetas de ajuste macro sobre países en problemas.

Con la misma facilidad y torpeza con que se podría confundir al pirómano con el bombero, los mitos y prejuicios sobre el FMI suelen lograr arraigo en dirigentes inspirados en el voluntarismo populista, tan bien representada en esa frase que mejor ganar elecciones con déficit fiscal que perderlas con superávit.

Pues bien, y en su lugar, antes ir a los datos: todo lo que está diciendo el FMI hoy es aquello que cautela desde su fundación: que la estabilidad económica y financiera (fue creado para preservarla) no pueden sostenerse si las políticas sociales no están adecuadamente financiadas.

Léase: gastos permanentes que no descansen en ingresos permanentes terminan en apretones de programas públicos y/o "impuesto-inflación" que pagan –¿será necesario recordarlo?– los más pobres.

Y si de examinar mitos y prejuicios se trata, un estudio reciente del propio FMI ofrece datos interesantes[1].

Primero, el aumento del gasto social se aceleró en los países con programas de ajuste en comparación con los países sin programas. Y más se aceleró en los países de bajo ingreso que tenían programas con el Fondo.

Segundo, la mediana del aumento anual del gasto en educación y atención de la salud en los países de bajo ingreso con programas fue, desde 2000 en adelante, más del doble del promedio de 1985-1999. El mismo estudio llega a conclusiones aún más robustas cuando controla estadísticamente por variables como la estructura de la población por edades, los niveles de ingreso y las condiciones macroeconómicas.

Un canal importantísimo por el cual fluyen los programas que contribuyen a promover el gasto en educación y atención de la salud es el de los impuestos. Las políticas de sanidad financiera crean así espacio fiscal para la inversión social. No es cierto, entonces, que la disciplina que imponen las políticas del FMI a países que no la tienen derive en menos gasto social.

Por otro lado, existen países que aún sin tener programas de crédito con el FMI, se benefician al recibir asistencia técnica específica. Soy testigo, no imparcial, claro. Por varios años me ha tocado participar en misiones de asistencia técnica a bancos centrales en países con PIB menor al chileno. Puedo dar cuenta y fe de la creación de capacidades de análisis y gestión. Por citar uno de entre muchos ejemplos: el aprendizaje para bajar riesgos de pérdida en el manejo de reservas internacionales en países donde, como en ningún otro, las necesitan líquidas y estables.

Así pues, sorprenderse de la contribución del FMI a salvaguardar la estabilidad no debería resultar novedoso. Menos aún si se pretendiere cosecha ideológica de una determinada recomendación sobre impuestos para financiar gasto permanente.

Los mitos y prejuicios ayudan poco a resolver problemas de política pública. El fortalecimiento del gasto social y la asistencia técnica gracias al FMI lo dicen todo.

[1]Clements Benedict, Sanjeev Gupta y Masahiro Nozaki. What Happens to Social Spending in IMF-Supported Programs? IMF staff discussion note. Washington DC, 2011. www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1115.pdf

Observatorio Económico ❯

Decano: Jorge Rodríguez Grossi.
Fono Facultad: 889 7366
e-mail: jrodrigu@uahurtado.cl
economiaynegocios.uahurtado.cl/observatorio
Producción OE: Comunicar, Escuela de Periodismo UAH.